

## Comunicado de Prensa

# Informe de Coyuntura Social 2019-2020

**Para reducir las inequidades y fortalecer la cohesión social, se necesita una sólida política social con prioridades claras e instrumentos efectivos que promueva el bienestar de todas las personas y atienda las necesidades diferenciadas de los más pobres, la niñez y juventud, aun en situaciones de emergencia.**


Este año, el Informe de Coyuntura Social examina las desigualdades entre distintos grupos de la población, entendida esta como inequidad en el acceso a oportunidades económicas y sociales; y, además, elabora propuestas para reducirlas y fortalecer la cohesión social.

A partir de distintos análisis, se constata que la pandemia del COVID-19 ha repercutido en la vida de las personas de manera desigual; y, entre los más afectados se encuentran los pobres, la niñez y la juventud. Además, las brechas que más se han ampliado están relacionadas con el acceso a salud, educación y empleo, áreas que son fundamentales para potenciar las capacidades de las personas y los medios para convertirlas en autogestoras de su propio desarrollo.

Esta situación ha hecho evidente uno de los principales desafíos de la política social: mejorar el bienestar de todas las personas y atender las necesidades diferenciadas de los más vulnerables, aun en situaciones de emergencia.

**La magnitud de los impactos de la crisis depende de las brechas preexistentes en el acceso a oportunidades económicas y sociales.**

La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 no afecta a todas las personas por igual. Las brechas socioeconómicas existentes desde antes de la pandemia pueden determinar la severidad de los impactos de esta. Asimismo, la desigualdad puede agravarse como consecuencia de la situación actual. En El Salvador, las disparidades más marcadas se identifican en los indicadores de salud, educación y empleo. Las menos profundas son en el acceso a agua, electricidad y servicio sanitario.




Con respecto a la situación del empleo, se estima un gran golpe, en especial para los sectores laborales donde se concentran la mayoría de las personas en vulnerabilidad económica. En términos de educación, se prevé que las brechas de logros académicos se profundicen entre la niñez y juventud vulnerable y sus pares más privilegiados. Los efectos en la salud también son mayores para las personas en vulnerabilidad económica, debido a las condiciones precarias de sus viviendas y empleos. Finalmente, ya se vislumbran graves efectos en la seguridad alimentaria. En julio de este año, se registraban 475.5 mil personas afectadas en este ámbito a causa de la emergencia por COVID-19.


Es importante reconocer que las desigualdades deberían tomarse en cuenta para la planificación de la respuesta del gobierno a la crisis. Por tanto, para evitar que las brechas socioeconómicas estructurales se profundicen, se debe procurar: 1) un piso mínimo de protección social para todas las personas, 2) una reactivación económica sólida y ordenada; 3) la participación de todos los actores de la sociedad para una toma de decisiones integral; y 4) que los tomadores de decisiones se enfoquen en los efectos de la crisis en el mediano y largo plazo, dado que evitar un incremento de las desigualdades hoy, facilitará el trabajo del gobierno en los años venideros.

**Priorizar acciones en pro del desarrollo infantil temprano, durante y después de la pandemia es clave para mitigar las repercusiones en el bienestar, los rezagos en el desarrollo y la profundización de desigualdades entre la primera infancia.**

La pandemia y la respuesta a esta han obligado a muchas familias a adoptar mecanismos de supervivencia que podrían dejar en segundo plano las necesidades de la primera infancia. Esto da lugar a consecuencias graves en el desarrollo infantil temprano, siendo mayor el impacto en las niñas y niños más vulnerables. Ciertamente, las privaciones en los hogares constituyen capacidades distintas para enfrentar la crisis.

En primer lugar, se ha agravado el cuidado y aprendizaje, por ejemplo, algunos niños enfrentan rezagos educativos por falta de tiempo y habilidades de los padres, ausencia de herramientas en el hogar y competencias digitales insuficientes de los docentes. Otros pueden estar en abandono o verse obligados a asumir las tareas domésticas y de cuidado. En segundo lugar, la salud y alimentación están en






riesgo. La crisis ha provocado interrupciones en controles maternos e infantiles, vacunación y atención a otras enfermedades, incrementos en el hambre y efectos psicológicos. En tercer lugar, los niños han quedado expuestos a vulneraciones de derechos. Se ha reducido la cantidad de factores de protección a su alrededor y podrían generarse interacciones violentas a causa del estrés, incertidumbre y miedo.


Ante esta coyuntura, el país cuenta con instrumentos legales e instituciones para responder a las necesidades de la primera infancia. Asimismo, el Estado ha implementado acciones en respuesta a la crisis, tales como políticas de protección social para la economía familiar y medidas de atención especializada para la niñez. Sin embargo, hay desafíos a superar. Lo fundamental es encaminar acciones de corto, mediano y largo plazo que articulen recursos y capacidades para garantizar calidad, equidad y sostenibilidad en los servicios de desarrollo infantil temprano.

**Es fundamental preservar la gobernabilidad, estabilidad y cohesión social del país reduciendo brechas sociales impactadas por los efectos del COVID-19 en los jóvenes y el empleo.**

Medidas adoptadas para prevenir contagios de coronavirus han tenido efectos negativos en la producción y el consumo nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que, en 2020, el producto interno bruto (PIB) salvadoreño caerá en 8.6%. Tal situación genera pérdidas de trabajo. Datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan que entre febrero y junio hubo una disminución de 73,538 empleos formales.

Los registros del ISSS también demuestran que 33,609 jóvenes habían dejado de contar con empleos formales desde que inició el 2020 hasta mayo. De este total, el 82.4% corresponde a pérdidas ocurridas solo entre marzo y mayo, evidenciando el fuerte impacto de la crisis en la juventud y el trabajo. Desde antes del COVID-19, los jóvenes ya estaban en desventaja laboral con respecto a la población económicamente activa (PEA) en general, incluso había brechas dentro del mismo grupo etario por motivos de sexo y área. Efectos causados en ellos por la emergencia, como la interrupción de procesos educativos, reducción de ingresos laborales y mayor dificultad de acceso a empleo a raíz de la emergencia; representan un riesgo para intensificar problemáticas presentes desde antes del coronavirus, tales como la pobreza, el desempleo y la migración.





El Estado ha implementado acciones para paliar el impacto negativo de la pandemia en el mercado laboral, pero sin responder específicamente a los efectos en el empleo juvenil. Para promover la generación de oportunidades de trabajo para los jóvenes, en el marco de un proceso de reactivación económica, se necesitan intervenciones en, al menos, tres áreas: a) estímulo económico, b) apoyo a empresas, empleabilidad e ingresos, y c) diálogo y coordinación social. Este último elemento es fundamental, pues solucionar las desigualdades y fortalecer la cohesión social se ha vuelto aún más imperioso después de la crisis causada por el coronavirus.

En conclusión, el Informe de Coyuntura Social 2019-2020 propone que para reducir las inequidades y fortalecer la cohesión social es imperativo que la política social sea integral y promueva un balance adecuado entre la implementación de medidas que potencien las capacidades de todas las personas a través de la universalización de servicios sociales, y aquellas orientadas a proteger a los grupos vulnerables. Además, esta debe incluir acciones de corto, mediano y largo plazo que sean sostenibles financiera y políticamente en el tiempo.

**Siendo no discriminatoria y redistributiva, la política social debe asegurar que todas las personas, especialmente las más pobres y vulnerables, tengan igual acceso a oportunidades para mejorar su nivel de bienestar. Y, en la medida que esto se logre sobre la base de una sólida institucionalidad y el compromiso de distintos actores con el desarrollo, la política social contribuirá a fortalecer la cohesión social y la construcción de una sociedad más justa, equilibrada y equitativa.**

Antiguo Cuscatlán, 30 de septiembre 2020

